

DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA SITUACIÓN DE AGRESIONES EN CONTRA DE LAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo a la situación de agresiones en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos en México presentada por los diputados Armando Ríos-Piter y José Luís Jaime Correa del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el 6 de mayo de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. La proposición con punto de acuerdo presentada expone en las consideraciones que:

1. La población indígena Me'phaa (tlapaneca) de la región Costa-Montaña del estado de Guerrero, sufre desde hace décadas la extrema pobreza, el abandono, la discriminación y una constante violación a sus derechos humanos cometida por parte de autoridades civiles y militares. Frente a esa situación, la población indígena de la región se organizó en 1994, conformando la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, de la cual nació en el 2002, la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) con residencia en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, Costa Chica de Guerrero y dedicada a reconstruir desde la base el poder económico, cultural y político de sus comunidades y a denunciar las sistemáticas violaciones a sus derechos humanos.

2. Entre los casos más importantes que ha denunciado y acompañado la OPIM se encuentra el de la violación sexual y tortura en contra de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú cometida por militares en el 2002, los cuales actualmente son del conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La OPIM también denunció la esterilización forzada de 14 hombres Me'phaa en la comunidad de El Camalote en 1998, caso por el cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 66/2007 el 17 de diciembre del 2007, exigiendo que se procese a los culpables y que se indemnice a las víctimas.

3. A raíz de estas denuncias, líderes e integrantes de la OPIM han sufrido constantemente amenazas, ataques físicos y verbales. Por ello el 26 de junio de 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares a 41 integrantes de la Organización con el fin de preservar su vida e integridad personal, las cuales no fueron atendidas cabalmente por el Estado mexicano. Ante el incremento de las agresiones, desde el 9

de abril del 2009, las y los integrantes de la OPIM cuentan con medidas provisionales ordenadas al Estado Mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4. A la larga lista de hostigamientos que hasta la fecha se continúan denunciando, uno de los más dramáticos es el ocurrido el 11 de abril de 2008, que consistió en el libramiento de 15 órdenes de aprehensión en contra de líderes e integrantes de la OPIM y en la detención de cinco de ellos, ocurrida el 17 de abril del 2009, con base en la fabricación de un expediente, acusándoles del homicidio de Alejandro Feliciano García, ocurrido en diciembre del 2007, sin ninguna prueba y violando sus garantías procesales.

5. A raíz de este uso desviado del sistema de procuración de justicia, fueron detenidos el 14 de abril de 2008 Raúl Hernández Abundio, Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanares Lorenzo, Natalio Ortega Cruz y Romualdo Santiago Enedina. Dichos líderes indígenas de la OPIM fueron encarcelados en la prisión de Ayutla de los Libres.

6. Después de haber examinado atentamente el caso, los cinco integrantes de la OPIM fueron declarados por Amnistía Internacional como presos de conciencia a causa de actividad en la defensa de los derechos de los indígenas.

7. El caso de Raúl Hernández Abundio actualmente está en el periodo de ofrecimiento de pruebas (periodo de instrucción); la defensa de Raúl Hernández Abundio continúa demostrando las inconsistencias de la acusación a lo largo del proceso. Asimismo, se han aportado suficientes elementos para probar su inocencia: al interrogar a los testigos de cargo entraron en contradicciones y los testigos de descargo han sido contundentes al referir las actividades que Raúl realizó durante el tiempo en que ocurrió el homicidio. Se prevé que en breve, una vez cerrada la instrucción, el juez de la causa esté en aptitud de dictar una sentencia absolutoria.

8. Esta dictaminadora ha tomado en cuenta, el informe Sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, señala que cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de las defensoras y defensores se niega a su vez a miles de personas la oportunidad de obtener justicia por violaciones a sus derechos humanos. Ello en virtud de que se pone en grave riesgo la labor de protección y promoción de los derechos humanos, la verificación social del correcto funcionamiento de las instituciones públicas, el acompañamiento y apoyo judicial de víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otras tareas.

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la proposición con Punto de Acuerdo para que ésta:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes y al orden federal, exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero a revalorar los elementos que le han llevado a presumir la comisión del delito de homicidio y la responsabilidad que atribuye a C. Raúl Hernández Abundio de modo que en caso de que durante el proceso se pruebe que la conducta o los hechos no constituyen delito conforme a la descripción típica contenida en la ley penal, o bien que el inculpado no tuvo participación en el ilícito que se persigue, se promueva el sobreseimiento del proceso penal, así como la libertad absoluta del señor Hernández Abundio; o bien, se promuevan conclusiones no acusatorias de ser procesalmente oportuno.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes y al orden federal, exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero para que la resolución que el C. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende emitirá dentro de la causa 48/2008 sea dictada a la brevedad; se apegue a los principios de independencia e imparcialidad; analice de forma objetiva las pruebas ofrecidas y desahogadas; y respete el principio de presunción de inocencia, a efecto de que el C. Raúl Hernández Abundio tenga un juicio justo.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes y al orden federal, exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero para que a través de la Dirección General de Régimen Penitenciario, instruya al C. Director del Centro de Readaptación Social de Ayutla de Los Libres para que garantice la integridad física del señor Raúl Hernández Abundio, quien se encuentra a la fecha recluido en dicho recinto.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis con base en los siguientes argumentos:

I. La Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, establece en el artículo 1º que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en los planos nacional e internacional.” Por lo tanto, toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional, debe ser considerada como defensora de derechos humanos.

II. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos es fundamental para la implementación universal de estos derechos, así como también para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho.

III. Actualmente, el caso de Raúl Hernández se encuentra en el periodo de ofrecimiento de pruebas (periodo de instrucción). Asimismo, que la defensa de Raúl Hernández Abundio ha aportado suficientes elementos para probar su inocencia: al interrogar a los testigos de cargo entraron en contradicciones y los testigos de descargo han sido contundentes al referir las actividades que Raúl realizó durante el tiempo en que ocurrió el homicidio.

IV. Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), hizo un llamado el 17 de abril 2010, a dos años de la privación de la libertad de Raúl Hernández Abundio, miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y defensor de los derechos de los pueblos indígenas en el Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, para que el sistema de justicia del Estado de Guerrero tome en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos y actúe conforme a los principios de diligencia debida, imparcialidad y celeridad.

V. Esta dictaminadora también se allegó de información que señala que el 12 de febrero del 2010, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en el Estado de Guerrero resolvió confirmar la cancelación de la órdenes de aprehensión giradas el 11 de abril del 2008 en contra de cinco integrantes de la OPIM, todos defensores de derechos humanos e integrantes de la Organización a la que pertenecen Raúl y que también fueron falsamente incriminados como autores intelectuales por el mismo delito del que se acusa a Raúl.

La resolución de la revisión penal 365/09 confirmó el amparo que había sido otorgado a los cinco defensores por la Jueza Federal Livia Lizbeth Larumbe Radilla el 21 de abril del 2009.

Ésta fue la segunda ocasión en la cual un Tribunal Colegiado confirmó la existencia de graves irregularidades en las acusaciones fabricadas contra los integrantes de la OPIM por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, pues cabe recordar que el 19 de marzo del 2009 recuperaron su libertad otros cuatro integrantes de dicha organización indígena acusados del mismo crimen, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado confirmara el otorgamiento de un amparo a los presos Me’phaa.

VI. El Informe Sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas de la CIDH, del año 2006 señala que cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de las defensoras y defensores

se niega a su vez a miles de personas la oportunidad de obtener justicia por violaciones a sus derechos humanos. Poniendo en grave riesgo la labor de protección y promoción de los derechos humanos, la verificación social del correcto funcionamiento de las instituciones públicas, el acompañamiento y apoyo judicial de víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otras tareas.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes y al orden federal, exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero a revalorar los elementos que le han llevado a presumir la comisión del delito de homicidio y la responsabilidad que atribuye al C. Raúl Hernández Abundio.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes y al orden federal, exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y al Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero para que se garantice plenamente la integridad física del señor Raúl Hernández Abundio, quien se encuentra a la fecha recluido en el Centro de Readaptación Social de Ayutla de Los Libres, así como sus derechos procesales.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de los poderes ejecutivos de la Federación, así como estatal y municipales del Estado de Guerrero a que garantice la seguridad y protección necesarias para todas y todos los defensores de derechos humanos que realizan trabajos en esa entidad federativa.